

Una Nueva Agenda Económica y Social
para América Latina



**Lima: nuevos actores y reformas institucionales.
¿Vino nuevo en odres viejos?**

Julio Cotler

2008

Este trabajo fue escrito entre 2007 y 2008 como contribución al proyecto *Una Nueva Agenda Económica y Social para América Latina*, realizado por el iFHC – Instituto Fernando Henrique Cardoso y CIEPLAN – Corporación de Estudios para Latinoamérica. El proyecto fue realizado gracias al apoyo de AECI – Agencia Española de Cooperación Internacional, BID – Banco Interamericano de Desarrollo, y de PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las informaciones y opiniones presentadas por los autores son de responsabilidad personal y no expresan necesariamente, ni comprometen, a las instituciones asociadas al proyecto.

Coordinación general del proyecto: Simon Schwartzman e Ignacio Walker.

Equipo Ejecutivo: Sergio Fausto, Patricio Meller, Simon Schwartzman, e Ignacio Walker.

Copyright ©: iFHC/CIEPLAN. 2008. San Pablo, Brasil, y Santiago de Chile.

El texto, en parte o en su totalidad, puede ser reproducido para fines no comerciales dentro de los términos de la licencia de Creative Commons 3.0

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es>



Lima: nuevos actores y reformas institucionales. ¿Vino nuevo en odres viejos?

Julio Cotler*

“En Lima mismo no he aprendido nada del Perú. Allí nunca se trata de algún objeto relativo a la felicidad pública del reino. Lima está más separada del Perú que Londres, y aunque en ninguna parte de la América española se peca por demasiado patriotismo, no conozco otra en la cual estos sentimientos sea mas apagado. Un frío egoísmo gobierna a todos, y lo que no sufre uno mismo, no da cuidado a otro”.

Alexander von Humboldt¹

1. El Perú es Lima...

A pesar de los variados y múltiples cambios que ha experimentado a lo largo de su historia, el Perú sigue siendo considerado uno de los países más “centralistas” de América Latina, lo que es mucho decir²; no obstante, es evidente la incapacidad del “centro” para atender las demandas sociales provenientes de los sectores populares y de las regiones, motivo por el que desde distintos ángulos se proclama la necesidad de reformar y fortalecer las instituciones democráticas a fin de que puedan cumplir sus funciones eficazmente.

La dominación social y racial ejercida por las capas dominantes y la administración colonial radicadas en la “Ciudad de los Reyes” - como era denominada Lima durante el virreinato peruano - que, sea dicho de paso, fue la más importante dependencia española en América del Sur - y su prolongación durante el accidentado periodo republicano contribuyeron a sellar el carácter centralista de la organización social y política. Luego, el carácter unitario y presidencialista de la organización estatal del Perú independiente se sumó para consolidar dicho régimen centralista. De ahí que a principios del siglo pasado el escritor Abraham Valdelomar pudiera afirmar sin titubear que “el Perú es Lima...”.

Por último, desde mediados del siglo pasado el centralismo limeño se renovó y reforzó a partir de las decisiones adoptadas por sucesivos gobiernos, tanto democráticos como

* Instituto de Estudios Peruanos.

¹ Humboldt en el Perú. Diario de Alejandro de Humboldt durante su permanencia en el Perú (agosto a diciembre de 1802). Piura (1991) Centro de Investigación y promoción del campesinado, p.87.

² Claudio Véliz, (1984), La tradición centralista de América Latina. Barcelona: Ariel.

autoritarios que, inspirados en idearios nacionalistas y populares, buscaban alterar esa arraigada tradición histórica.

La extrema concentración del poder y de la autoridad en Lima es la causa de que ella constituya el único centro metropolitano y polo “moderno” del país, y por lo tanto, que se encuentre muy distanciado de las restantes ciudades “provincianas” en términos de población, actividad económica, influencia política y cultural, a diferencia de lo que acontece en otros países andinos en que varias ciudades comparten y compiten por tales atribuciones³.

Por estos motivos Lima es el lugar privilegiado para desarrollar iniciativas y actividades de distinta naturaleza, y para conectarse con el exterior; asimismo que sea el emplazamiento conveniente para solicitar y obtener favores y prebendas oficiales, así como el espacio estratégico para la constitución y confluencia de actores sociales y movimientos que persiguen trastocar la mencionada concentración del poder.

En efecto, históricamente, Lima ha agrupado a los actores que adoptan las decisiones políticas y económicas cuyos efectos inciden sobre el conjunto de la sociedad y el territorio. Siguiendo la tradición colonial, la presencia en la capital de las más altas autoridades y de los más importantes funcionarios de las instituciones públicas, de los dirigentes políticos y del grueso de la administración pública, se acompaña con la centralización de la recaudación tributaria y que una proporción importante del gasto público se destine a cubrir las necesidades y exigencias de los habitantes de la ciudad, aunque de manera muy desigual entre las capas e intereses sociales; por esto, no debe extrañar que la mayoría de los servicios públicos y de más elevada calidad se encuentre en la capital.

Simultáneamente, en Lima radican las principales empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la manufactura, el comercio y las finanzas, debido a que, desde tiempo atrás, constituye el principal mercado del país⁴; igualmente, en la ciudad se encuentran las sedes de las empresas que explotan y exportan recursos naturales, debido a que Lima cuenta con

³ Lima-Callao tiene 8.6 millones de habitantes, la tercera parte de la población total del país, en tanto Arequipa, la ciudad que le sigue en importancia, cuenta con un millón de habitantes. En Ecuador, Guayaquil tiene 2.5 y Quito 2.2 millones de habitantes; es decir que cada una de estas ciudades comprende 20% de la población total; en Bolivia, Santa Cruz cuenta con 1.3 y La Paz-El Alto con 1.6 millones de habitantes equivalentes a 14% y 17% de la población, respectivamente.

⁴ Efraín Gonzáles de Olarte (1992), *La economía regional de Lima. Crecimiento, urbanización y clases populares*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos., pp. 135-140

los indispensables servicios privados y públicos que permiten desarrollar esas actividades, como el principal puerto (Callao) y el único aeropuerto internacional. De ahí que Lima genere el 49% del PBI y que el 84% de los créditos y el 86% de las colocaciones bancarias se realicen en la ciudad; asimismo que el 89% de los ingresos tributarios se originen en Lima, pero si se considera el lugar donde las empresas realizan sus actividades esa proporción baja a 49%.

En el mismo sentido, Lima concentra la producción y la difusión cultural que se origina en el país al igual que en el exterior. Además de contar con los centros académicos, los profesionales y los intelectuales más calificados y renombrados del país, en Lima se producen los periódicos, libros y revistas de circulación nacional; asimismo en la capital se encuentran las estaciones de radio y de TV que tienen cobertura e influencia en todo el territorio, al igual que las empresas que prestan servicios telefónicos y de Internet.

Estas características facilitan que Lima constituya el centro de creación y propagación de nuevos estilos y contenidos culturales, elaborados por jóvenes y migrantes de las diferentes regiones y sectores del país, representantes de variados intereses y sensibilidades, confrontados con las corrientes intelectuales y artísticas internacionales; por otro lado, esta insólita concentración de población y recursos hace de Lima un lugar estratégico para la elaboración y difusión de novedosos planteamientos artísticos, así como de propuestas ideológicas y políticas de distinto signo que, en algunos casos, persiguen redefinir la distribución del poder a escala social y regional.

Estas condiciones políticas, económicas y culturales hacen posible que Lima monopolice las oportunidades para acceder a las actividades modernas y formales, situadas en las esferas públicas y privadas, por lo que aparece como una cabeza sobredimensionada con relación a un cuerpo raquíutico.

Pero, por otro lado, ese panorama también propicia que en esta ciudad sea más visible y sensible la desatención de las instituciones públicas a las provincias, lo que da lugar a que sus pobladores y autoridades hagan referencia a que su suerte esta marcada por la “ausencia de Estado” y abunden las manifestaciones de hostilidad al odioso centralismo y al “colonialismo interno” responsable de la postración del interior.

Pirámide Socioeconómica de las Grandes Ciudades

NSE	Perú: Grandes Ciudades (más de 20 mil habitantes)	Gran Lima	Ciudades del Interior
A/B	18.50%	23.50%	13.40%
C	32.50%	35.10%	29.90%
D	30.00%	28.70%	31.30%
E	19.10%	12.70%	25.40%

Fuente: APOYO, 2007.

Esta concentración de los recursos públicos y privados en Lima se agudizó entre mediados de los años cincuenta y fines de los ochenta del siglo pasado, debido a las políticas que adoptaron distintos gobiernos a fin de impulsar el proceso de “modernización” económica y social del Perú.

Durante los años sesenta, a instancias del crecimiento de la población, de la economía y de los ingresos fiscales, el país experimentó una insólita movilización que se manifestó a través de la constitución de organizaciones sociales y de partidos políticos de inspiración nacionalista y marxista que selló la crisis del régimen de dominación oligárquica, de raigambre colonial, y su orientación económica liberal.

Al igual que en otros casos, esta crisis dio curso a la formación de gobiernos “populistas”, civiles y militares, que entre los años sesenta y el fin de la década de los ochenta, implantaron medidas que transformaron el rostro del país; éstas fueron, fundamentalmente, la reforma agraria (1969) que eliminó a los terratenientes tradicionales, herederos del legado colonial, y la política de sustitución de importaciones que se implantó desde principios de los años sesenta, destinada a fomentar la industrialización y, en general, la transformación económica y social.

Pero, contrariamente a lo que se esperaba, esta última medida reforzó el centralismo limeño al tiempo que la agricultura familiar y las provincias serranas se empobrecían. En efecto, la sustitución de importaciones privilegió el mercado y el consumo urbano, concentrado en Lima, mediante controles de precios y subsidios a las importaciones de alimentos en detrimento de la producción doméstica; además del gasto público centrado en la costa urbana, estas condiciones neutralizaron los alcances de la reforma agraria y prolongaron la

crisis de la producción agrícola, particularmente, de la pequeña producción familiar y de subsistencia, propiciando la decadencia de la región serrana, donde se encontraba la mayoría de la población rural e indígena en condiciones de extrema pobreza⁵.

Estas consecuencias se debieron también al desinterés de la administración pública, de los partidos políticos y de los sectores económicos dominantes por la suerte del agro y de la población serrana, puesto que los intereses dominantes se encontraban enraizados en Lima y los centros urbanos de la costa.

Es así como, con alzas y con muchas bajas, la sustitución de importaciones modificó la estructura productiva y social del Perú y de Lima, con la consiguiente re-centralización de los recursos económicos y humanos en la capital debido a las ventajas comparativas que contaba con relación a las otras ciudades, tal como hemos mencionado antes; motivo por el cual, mientras la economía crecía y la composición social se diversificaba en Lima, el resto del país y particularmente la sierra atravesaban por una situación de estancamiento y de evidente deterioro, acentuando las diferencias y las distancias entre la capital y el interior, contribuyendo así a reforzar la percepción dualista del país.

Además de las concepciones que enfatizaban la heterogeneidad social, cultural y racial del país, cobró importancia aquella que ponía el acento en la oposición entre Lima y la costa, como representantes de la modernidad, y la sierra como relicto de un pasado arcaico; esta relación ha fortalecido la creencia de que Lima explota al resto del país y causa la pérdida de los recursos económicos y humanos de las provincias, determinando su atraso. Conforme a tales postulados, el tradicional “colonialismo interno” seguiría vigente y se mostraría en esta desigual relación social, étnica y regional; de ahí el extendido rechazo y desconfianza a las autoridades, y de los fuertes sentimientos anti-centralistas y regionalistas.

2. “Lima la horrible..”.

Esos cambios producidos por la adopción de la política de sustitución de importaciones propiciaron el desarrollo de una inédita movilización social en el campo, en contra de la dominación terrateniente, que culminó en la reforma agraria instaurada por el gobierno

⁵ El Perú tiene tres regiones geográficas: la costa desértica, donde se encuentra Lima; la sierra que atraviesa la cordillera de los Andes y la selva amazónica que abarca el 65% del territorio.

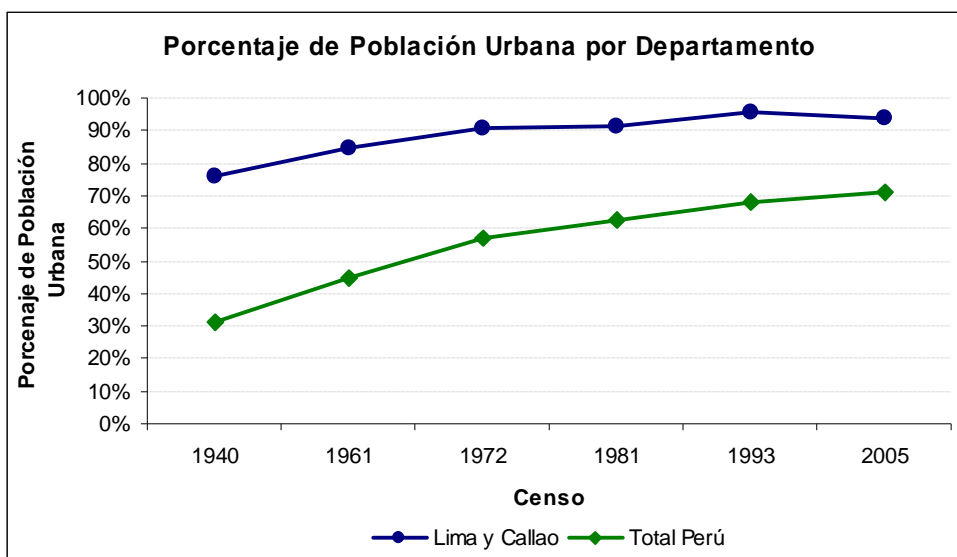
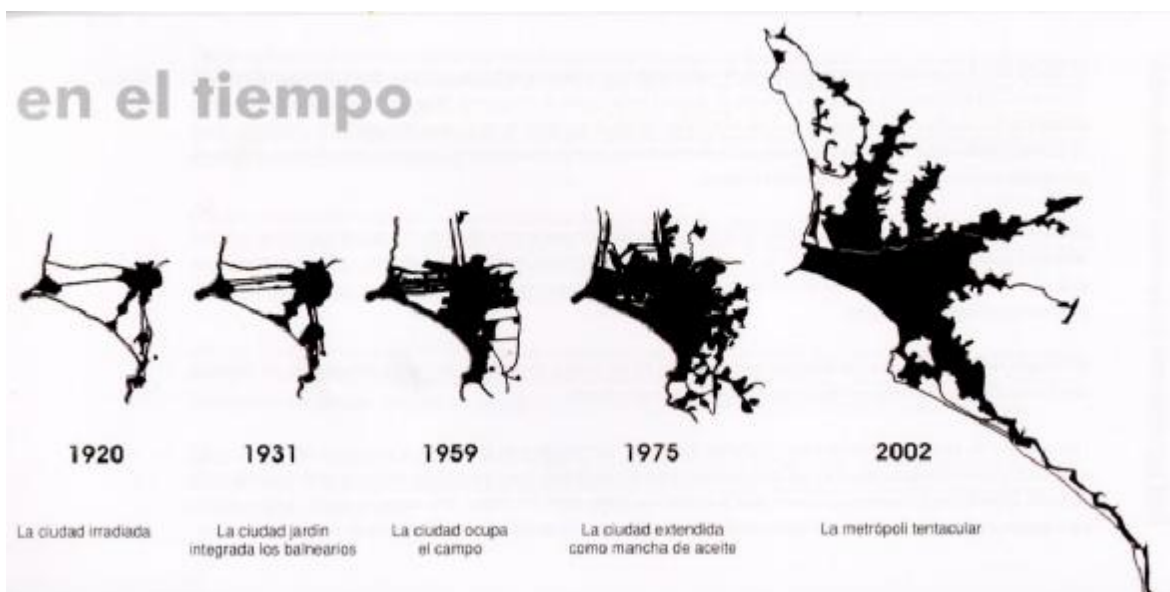
militar en 1969; asimismo, esas desigualdades y tensiones impulsaron la migración de la población rural hacia la costa urbana y fundamentalmente hacia Lima, por lo que esta ciudad tuvo un crecimiento demográfico espectacular durante los años sesenta que comprometió, primero, a las elites y a las capas medias regionales, con la consiguiente agudización del deterioro de las regiones del interior, y luego a la masa de campesinos empobrecidos.

Esta insólita y masiva presencia provinciana en Lima produjo intensas movilizaciones y demandas sociales a fin de que los gobiernos crearan fuentes de empleo y de ingresos, ofrecieran servicios públicos y terrenos para que los migrantes pudieran habilitar sus viviendas. Ante esta situación, las autoridades se vieron en la necesidad de reforzar las políticas favorables a la población urbana, incrementando y expandiendo los subsidios al consumo urbano a costa de postergar las demandas campesinas y regionales.

Estos factores desembocaron en el súbito crecimiento poblacional de la ciudad que desbordó sus contornos históricos y se extendió al desierto que rodea el valle donde originalmente se asentó la Ciudad de los Reyes, al punto de constituir hoy la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto⁶.

⁶ Debido al cambio climático, se estima que durante la próxima década desaparecerán el 80% de los glaciares situados en los Andes centrales, concretamente en el Perú, que originan los ríos que atraviesan y riegan los valles costeros, donde se concentran la mayor parte de los habitantes y la producción del país. Sin embargo, hasta el momento, los políticos, las autoridades y la “sociedad civil” no han dado muestras de preocupación por tal situación.

Crecimiento de Lima.



Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2006.

Este desenlace modificó la composición social y el trazo urbano de Lima: mientras las tradicionales capas dominantes y los sectores medios se ausentaban del centro de la ciudad y se trasladaban a nuevos barrios residenciales, los inmigrantes ocuparon las viejas casonas coloniales abandonadas y se organizaron para invadir terrenos públicos y privados, próximos a sus lugares de trabajo, a fin de construir precarias viviendas de esteras y adobe

que pasaron a formar las “barriadas” populares, despectiva denominación que se dio a estos asentamientos humanos.

Luego, estos pobladores, en su mayoría jóvenes provenientes de ciudades y pequeños pueblos del interior, impulsados por el ansia de “progreso”, fortalecieron sus organizaciones y debido a las presiones que ejercieron sobre las autoridades lograron que los políticos y los gobiernos “populistas”, interesados en ganarse su apoyo, instalaran servicios públicos y oficializaran dichos asentamientos como “pueblos jóvenes” y distritos que, en algunos casos, llegaron a constituir conglomerados urbanos que compiten en tamaño con las ciudades de provincias⁷.

Estos cambios demográficos, productivos y ocupacionales se asociaron con el explosivo crecimiento del reclutamiento escolar y universitario, lo que produjo la apertura de canales de movilidad social y cultural que comenzaron a deslucir la formación estamental de la sociedad peruana, así como la fundación de nuevas corrientes ideológicas y organizaciones políticas que atacaban los fundamentos de la dominación tradicional. Así, Lima se constituyó en el principal escenario político-social que contaba con alrededor de la cuarta parte del electorado nacional, mientras que el campesinado-indígena analfabeto, en su mayoría residente en la sierra, no contaba en términos electorales puesto que se le concedió el voto sólo en 1980.

La participación masiva de pobladores de la región andina en estas transformaciones determinó que Lima perdiera la categoría de arcadia colonial y produjera un profundo cambio cultural, generalmente asociado con el proceso de “cholificación”, al tiempo que el desorden, la suciedad y la incertidumbre, pero también los aires de libertad y de progreso que en ella se respiraban, la caracterizaban como “Lima, la horrible”⁸.

Sin embargo, paralelamente a estos abruptos e intensos cambios sociales, los nuevos actores adaptaron los viejos mecanismos políticos a las nuevas condiciones, prolongando los rasgos del *ancien régime*. Los jefes de las organizaciones políticas asumieron comportamientos patrimoniales con relación a los recursos públicos y reclutaron a sus

⁷ La administración de la ciudad comprende 42 distritos, cada uno con sus alcaldes y concejos municipales que deben coordinar con la Municipalidad de Lima; pero la desorganización del uso del suelo urbano, la confusa mezcla de estilos y formas de construcción y el caos del transporte son pruebas de que tal coordinación es inexistente, por lo que la segmentación residencial y de la recaudación tributaria condicionan la diferenciada calidad de los servicios existentes en la ciudad y en los distritos.

⁸ Sebastián Salazar Bondy (1964), México: Ed. Era.

allegados para integrar los aparatos burocráticos a fin de asistir a sus respectivas clientelas urbanas; para tales efectos, intervinieron discrecionalmente en la actividad económica mediante la constitución y expansión de empresas estatales, y favorecieron al sector privado próximo a los dirigentes políticos y a la burocracia pública mediante favores y prebendas, producto de un sinfín de controles, exenciones, permisos y subsidios.

Esta participación política determinó el crecimiento inorgánico y desmesurado de los aparatos estatales, dejando ver su desinterés e incapacidad para atender las necesidades y demandas de los sectores sociales desprovistos de patronazgo político -concretamente, el campesinado - y, en general, de la población que no encontraba empleo en la esfera urbana - la llamada población “marginal” -.

Es así como, paralelamente a las políticas pro-urbanas - y anti-agrarias - el Estado promovió la formación de capas obreras, de empleados, profesionales y empresarios subordinados a la función pública; no obstante esta debilidad original, dichos actores lograron organizar sus intereses corporativos y desarrollar sus intereses particulares estableciendo una relación ambivalente con el aparato público, de dependencia y de presión que, por momentos, amenazó desestabilizar el régimen político que les daba sustento.

3. De marginales a informales...

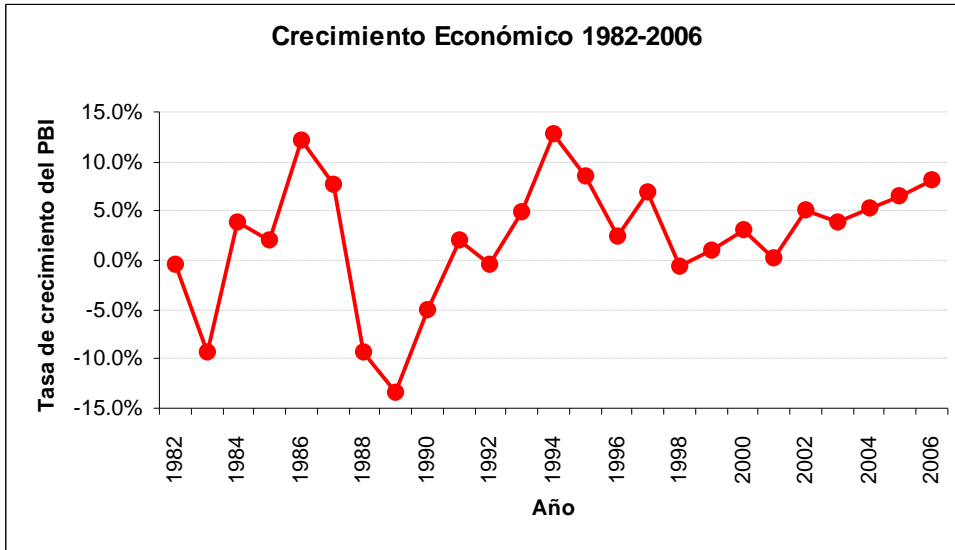
La recomposición política y las medidas que aplicaron los gobiernos generaron continuas crisis políticas y económicas que, a su vez, produjeron abruptos cambios de gobiernos y de regímenes políticos. En el marco de un aparato estatal pequeño y débil, las movilizaciones y transformaciones sociales de los años sesenta y la desordenada aplicación de la política de sustitución de importaciones determinaron una violenta crisis económica y política a fines de esa década, y un dramático ajuste. Este desenlace desprestigió al régimen político y radicalizó a vastos sectores populares y medios, a sectores eclesiásticos y militares, lo que desembocó en la crisis final del régimen de dominación oligárquico con la instauración del auto proclamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1968.

Para lo que aquí nos interesa, el radical programa anti-oligárquico y nacionalista del gobierno militar perseguía fortalecer el Estado. Para lograr tal propósito, primero, expropió los enclaves productivos extranjeros, lo que otorgó al sector público una importante participación en la actividad productiva, y comprometió abundantes recursos fiscales a la

construcción de obras públicas destinadas a fortalecer el potencial económico de la costa; en segundo lugar, decretó la reforma agraria destinada a eliminar los latifundios serranos donde se ejercían prácticas coloniales, las cuales, conjuntamente con las empresas agrarias expropiadas, se transformaron en cooperativas sometidas al control de funcionarios públicos; y en tercer lugar, dictó medidas destinadas a impulsar el desarrollo industrial centradas en la sustitución de importaciones que, a pesar de las proclamas revolucionarias, favorecía a las capas urbanas de la costa y castigaba al campesinado serrano. Sin embargo, a pesar de la radicalidad de las reformas, éstas no alteraron la tradicional distribución regresiva del ingreso.

Paradójicamente, estas decisiones que procuraban la modernización económica y social acentuaron la movilización popular que cuestionó la capacidad de las instituciones oficiales para encarar eficazmente las demandas regionales. Mientras las inversiones privadas se retraían y sectores empresariales se retiraban del país, el discurso ideológico que impulsaba la “participación social” y las reformas institucionales fortalecieron la organización de los sectores populares y su intervención en la vida pública, sin que los militares pudieran interrumpir con los controles corporativos que pretendieron imponer para encuadrar y frenar los ímpetus sociales.

A mediados de los años setenta, el desorden administrativo resultante del voluntarismo militar y las crecientes demandas sociales, sumados a la súbita elevación de los precios del petróleo y la masiva compra de armamentos en previsión de un conflicto bélico con Chile, hicieron estallar la crisis fiscal que, a su vez, amplió e intensificó la participación política contribuyendo a la creciente radicalización de los actores sociales. Ante esta difícil situación, en 1978 el gobierno se vio precisado a convocar a elecciones para formar la Asamblea Constituyente así como para la realización de elecciones generales en 1980, a fin de reducir las presiones sociales sobre el gobierno y la institución castrense y facilitar el retiro ordenado de los militares a sus cuarteles de invierno.



Pero, simultáneamente, el gobierno decretó el ajuste económico para equilibrar las cuentas fiscales y facultó el despido de miles de trabajadores, públicos y privados, en especial de dirigentes sindicales, lo que determinó que la transición a la democracia y a la década que se iniciaba estuviera sellada por una intensa confrontación política y social.

Dentro de estas condiciones complejas, el nuevo gobierno civil presidido por Fernando Belaunde (1980-1985) encaró situaciones extremadamente difíciles que mostraron las profundas limitaciones del Estado y la gobernabilidad democrática, poniendo a prueba la existencia misma del país. Las violentas acciones de los movimientos insurreccionales (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y las respuestas de las fuerzas armadas pusieron en vilo a los pobladores de la sierra del centro-sur y propiciaron la violación de los derechos humanos, sobre todo las del campesinado-indígena, impulsando el desplazamiento de 600.000 habitantes⁹.

La eclosión de la producción de coca, del tráfico de drogas y de la delincuencia común contribuyó a promover un conjunto de actividades y de comportamientos que escapaban y atacaban las normas legales, y que pasaron a formar parte del fenómeno de la “informalidad”. Simultáneamente, la crisis internacional de la deuda externa en 1982 y el fenómeno de El Niño en 1983, se agregaron para que el quebrantado aparato estatal y la

⁹ Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final, Lima 2003.

producción fueran duramente golpeados, con el consiguiente crecimiento de la población desocupada y del subempleo en Lima.

Por último, las arbitrarias decisiones nacionalistas y “heterodoxas” del presidente García (1985-1990) desembocaron en una prolongada hiperinflación que agudizó más las extremadamente difíciles condiciones sociales y políticas: entre 1980 y 1989, la población sub-empleada en Lima saltó de 25% a 74%, y la que tenía empleo adecuado cayó de 67% a 19%.

En estas condiciones, la conflictividad y la desarticulación social alcanzaron niveles desconocidos que se acompañó con una creciente ola de emigración del país, legal e ilegal¹⁰; el descrédito de los partidos y de la representación política contribuyó a la fragmentación y la descomposición política, al tiempo que la quiebra de las instituciones oficiales era manifiesta, entre otros motivos, porque la hiperinflación contribuyó a que la recaudación cayera al 4% del PBI. Es decir, a fines de los años ochenta, parecía que todas las plagas de Egipto hubieran caído sobre el Perú durante la “década perdida”, de ahí la impresión que el país atravesaba una coyuntura histórica caracterizada por la crisis orgánica del sistema social y político.

4. Liberalismo autoritario.

Simultáneamente a estos acontecimientos, diversos autores ofrecieron explicaciones a dichos fenómenos y fórmulas para remontar la violenta crisis que asolaba al país; estos planteamientos, radicalmente opuestos unos a otros, sostenían posiciones extremas que daban cuenta y reforzaban los advertidos agudos antagonismos sociales¹¹. En circunstancias que el socialismo real y el marxismo se encontraban en franca bancarrota, al igual que los modelos político-económicos centrados en el Estado, como era evidente en el caso peruano, los planteamientos de Hernando de Soto inspirados en los postulados de Reagan y Thatcher ganaron carta de ciudadanía entre empresarios, profesionales, militares

¹⁰ Desde entonces este flujo no ha cesado, estimándose que tres millones de peruanos radican en el exterior, es decir, alrededor del 10% de la población, y no parece que se frenará puesto que la mayoría de los jóvenes desea y se propone abandonar el país.

¹¹ Del maoísmo delirante de Guzmán, que proclamaba ser heredero de “millones de años de historia de la materia”, los diversos planteamientos pasaban por inventar la “utopía andina”, favorecer que el “desborde popular” reformulara la república “criolla”, hasta la necesidad de apuntalar a ultranza los postulados liberales y anti-estatistas.

y sectores populares del Perú y de muchos otros países, motivo por el que el libro “El Otro Sendero” se constituyó en un celebrado best seller¹².

Según este autor, los problemas del Perú – de América Latina y, en general, de los países subdesarrollados– radican en la capacidad que tienen los actores conectados con los dirigentes políticos de colonizar el aparato estatal en su beneficio particular, trabando e impidiendo el acceso al mercado a los que no cuentan con esos lazos políticos. Para contrarrestar este tradicional “mercantilismo”, como el autor denominó a estas conocidas prácticas patrimoniales, sería necesario liberalizar, privatizar y desregular la economía a fin de destrabar el crecimiento y facilitar el desarrollo de las potencialidades empresariales de los pobres y su integración plena al mercado, al tiempo que el Estado debería concentrarse en mantener la seguridad pública, el equilibrio de las variables macroeconómicas y la protección de los derechos de propiedad. Es decir, debía reducirse las funciones del Estado a la condición de “gardien de nuit” a fin que el mercado se hiciera cargo de la organización de la sociedad.

A pesar de que estos planteamientos ganaron una importante audiencia, la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa perdió frente a la de Alberto Fujimori en las elecciones de 1990, debido a que éste declaraba se oponía a ejecutar el temido ajuste estructural que proponía Vargas Llosa para abatir la hiperinflación. No obstante, al poco tiempo de iniciado su gobierno, Fujimori se vio precisado a aplicar tal medida para contar con el indispensable apoyo internacional.

El relativo éxito que generó esta decisión otorgó un elevado nivel de apoyo popular al presidente Fujimori facilitándole constituir una coalición con los poderes fácticos (banqueros y empresarios, altos oficiales de la fuerza armada, dignatarios de la Iglesia católica, organismos multilaterales y agencias de seguridad internacionales) que permitieron la ejecución del “auto-golpe” de abril de 1992, que se proponía suprimir los controles institucionales que impedían enfrentar a las fuerzas subversivas dejando de lado los derechos humanos y avanzar en las reformas liberales. El respaldo social a esa medida se vio reforzado al producirse la captura de los dirigentes y el desmantelamiento de las organizaciones subversivas, lo cual hizo posible reemplazar al personal gubernamental por figuras leales a Fujimori y a su asesor, Vladimiro Montesinos.

¹² Hernando de Soto (1986) El Otro Sendero, Lima: Ed. Barranco.

En tales circunstancias, Fujimori y Montesinos se apoderaron del Estado, lo que les dio licencia para violar impunemente los derechos humanos y ejecutar múltiples actos de corrupción; asimismo, para reeditar las viejas prácticas patrimoniales, concediendo favores y prebendas a su entorno familiar, amical y de sus leales seguidores, al tiempo que el presidente distribuía personalmente recursos públicos a sus clientelas populares. Por otro lado, dichos resultados contribuyeron también a reformular los preceptos constitucionales y a que los tecnócratas pusieran en marcha la liberalización, privatización y desregulación de la economía sin tener que rendir cuentas a ninguna institución, por lo que su actuación suscitó válidas sospechas de corrupción. Así a través de conductos anti-democráticos y prácticas autoritarias, la imposición de las reformas estructurales de “primera generación”, alteraron drásticamente el rumbo seguido por el país durante treinta años.

En resumen, la quiebra de las organizaciones y las políticas que durante décadas habían enfrentado la dominación oligárquica y trabado el desarrollo capitalista, al igual que la profunda debilidad y el descrédito del Estado, fueron factores que determinaron la constitución del régimen autoritario y facilitaron que la coalición fujimorista avanzara sin dificultades en su proyecto de reconfigurar la nación de acuerdo al modelo chileno impuesto por Pinochet, combinando los agentes y las reglas del mercado con los de la corrupción, de acuerdo a los proyectos personales de Fujimori y de Montesinos.

Después del aparatoso descalabro de la administración de García, el restablecimiento de las instituciones estatales claves – “las islas de modernidad” -, las políticas de ajuste y estabilización económicas, así como las facilidades y seguridades otorgadas por el gobierno a la inversión extranjera, contribuyeron a que se iniciara un ciclo de crecimiento y que con la ayuda internacional Fujimori pudiera asistir a las empobrecidas capas populares.

Después de mucho tiempo en que el pesimismo predominara en el ánimo de los peruanos, estos factores propiciaron que diferenciados sectores sociales reestablecieran su confianza en el futuro del país, apoyados en la creencia que las reglas y los agentes del mercado, especialmente la inversión extranjera y los empresarios informales serían los adalides de la prosperidad nacional que se avizoraba. Así ganó presencia la ilusión de que el nuevo régimen, y su política económica y social, favorecía el desarrollo de un nuevo y agresivo capitalismo popular, encarnado en el heroico empresario informal, residente en los pueblos jóvenes, básicamente de Lima.

Sin embargo, a este respecto, los ideólogos del liberalismo advertían que no se debía bajar la guardia ante las amenazas de los agentes y los comportamientos mercantilistas, así como ante la voracidad de las burocracias depredadoras que tanto daño habían causado - mientras desconocían las tropelías cometidas por la mafia fujimontesinista - para lo cual se requería crear las condiciones necesarias para que los informales pudieran acceder al crédito, registrando formalmente su propiedad y asegurando su derecho a la propiedad.

La rápida y descarnada aplicación de las reformas trastornaron el precario estado de la economía y de la sociedad; en consecuencia, afectaron directamente la estructura social de Lima. Después del debilitamiento del incipiente sector privado durante los años setenta y ochenta, la liberalización de la economía atacó las actividades que subsistían debido a la protección oficial y favoreció la producción destinada a la exportación, en detrimento del mercado interno, concretamente, de las actividades productivas centradas en Lima.

Este cambio en la estructura de la producción determinó la transformación de la propiedad empresarial, por lo que antiguos apellidos limeños desaparecieron del grupo dirigente, y que las empresas se localizaran en nuevas áreas de la ciudad conforme a sus necesidades, al tiempo que los antiguos barrios industriales de Lima eran abandonados a su suerte.

Por otro lado, estos cambios económicos y la represión gubernamental afectaron duramente el empleo, los ingresos y en general las condiciones de vida de los trabajadores, formales e informales. La desprotección a los trabajadores y las amenazas y los ataques a los dirigentes y a las organizaciones sindicales atribuibles a Sendero Luminoso y luego a los servicios de inteligencia de Montesinos contribuyeron a la desarticulación de los trabajadores, que no pudieron recuperar sus ingresos al tiempo que las reformas impulsaban la “tercerización” del empleo contribuyendo a que engrosaran, más aún, las filas de los informales¹³.

Es decir, después de los dramáticos embates experimentados durante la década perdida, el liberalismo autoritario de los años noventa parecía remodelar la organización de la sociedad y del Estado, cerrando definitivamente el largo ciclo de inestabilidad política y social iniciado a mediados del siglo pasado. Sin embargo, las continuas arbitrariedades y la

¹³ En la actualidad, se estima que la informalidad comprende alrededor del 80% de la población económicamente activa; esta proporción comprende a trabajadores no registrados por las empresas: en Lima, alrededor del 20% de los 514.000 asalariados en la mediana y gran empresa (de 50 o más trabajadores) son trabajadores “en negro”, lo que equivale a más de 100.000 trabajadores.

corrupción ejercida mafiosamente desde el poder, contradiciendo palmariamente el nuevo culto al mercado, propiciaron la creación de un movimiento nacional de oposición liderado por Alejandro Toledo a raíz de los fraudulentos e ilegales intentos de Fujimori para reelegirse en el año 2000, que determinaron su fuga a Japón donde obtuvo protección oficial.

5. La “doble transición”: economía de mercado y democracia.

Desde la instalación del gobierno de transición democrática presidido por Valentín Paniagua se desarrolló una política de lucha contra la corrupción reinante que denunció y persiguió a Fujimori, produjo la captura de Montesinos y la prisión de militares, empresarios, jueces, periodistas, publicistas por violación a los derechos humanos y diversos delitos como se puede apreciar en los “vladivideos”¹⁴. Estas acciones y la incorporación de la “transparencia” en el manejo de las cuestiones públicas enfrentaron las perniciosas relaciones entre la receta del consenso de Washington y la mafiosa política fujimontesinista, que derivó en la “doble transición” que combina la economía de mercado con la democracia. No obstante, quedaba pendiente de solución la creciente acumulación de contradicciones sociales, étnicas y regionales que tipifican la oposición entre la capital y las provincias, y que fuera causa de la creciente crítica a las instituciones oficiales y a la democracia existente.

Con la elección de Alejandro Toledo en 2001, éste persistió en la misma política económica liberal aduciendo que la inversión privada y de preferencia extranjera estimularía el crecimiento y el reparto de los excedentes económicos entre los sectores populares – el “chorreo”-, en tanto que las propuestas anti-liberales y estatistas de Alan García estaban condenadas a repetir los desastres de su gobierno de 1985-90.

Pero, los arrebatos patrimonialistas del presidente Toledo, el incumplimiento de sus promesas relativas a que su gobierno crearía fuentes de trabajo y elevaría los ingresos, así como los intentos por seguir privatizando las pocas empresas públicas que quedaban desataron violentas protestas que la oposición aprovechó para armar una campaña de desprestigio destinada a deslegitimar al gobierno y a destituir al presidente Toledo. La

¹⁴ Los llamados “vladivideos” son las grabaciones secretas que realizó Vladimiro Montesinos donde se aprecian la compra de empresarios, jueces, periodistas para asegurar su apoyo al régimen.

novedad de estas manifestaciones fue la renovación de la creciente participación de los pobladores de las ciudades del interior y de las áreas rurales reclamando la atención estatal a sus requerimientos. .

Para contrarrestar estas protestas, el gobierno emprendió un conjunto de programas de alivio a la pobreza que tuvieron un reducido impacto debido, principalmente, a que el legado patrimonial del Estado y las prácticas mafiosas del fujimorismo determinaban la precariedad de las instituciones oficiales para atender masiva y universalmente a las capas populares, al tiempo que satisfacían los requerimientos de los inversores. De ahí que proliferaran las denuncias porque el Estado aparecía débil o ausente con relación a las necesidades de las capas populares al tiempo que se mostraba eficiente y presto para velar por los intereses de los capitalistas.

Por otro lado, haciéndose eco de viejas aspiraciones provincianas, el presidente Toledo propuso llevar a cabo la descentralización del país con el propósito de que las demandas y los conflictos fueran administrados localmente, para lo cual el Congreso aprobó convocar a elecciones para nominar las autoridades regionales, aunque no se contara con la norma que definiría la organización y los recursos que tendrían las regiones y las funciones que debían cumplir sus autoridades; es decir se puso la carreta delante de los bueyes¹⁵.

Contrariamente a las expectativas del presidente, las elecciones regionales abrieron nuevos espacios de participación que contribuyeron a expandir la competencia política, a ampliar las demandas sociales a nuevos niveles sociales y a que arreciaran las acusaciones contra Toledo por mantener el centralismo político y por ser responsable de que el crecimiento económico no alcanzara a la población situada en extrema pobreza. Estas circunstancias facilitaron que el Apra ganara diez gobiernos regionales, a partir de los cuales acentuó las presiones contra el gobierno central.

Después del repunte económico observado entre 1993-1997, las sucesivas crisis mundiales determinaron que el crecimiento se redujera a 2.5% anual durante el periodo 1990-2005, lo

¹⁵ Para evitar los problemas suscitados con la delimitación geográfica, el Congreso decidió que cada uno de los departamentos se convirtiera en una región; éstas son administradas por el presidente y el consejo regional mientras que, paralelamente, los alcaldes y concejos provinciales y de distritos administran sus respectivas circunscripciones, con la consiguiente superposición entre esas diferentes instancias gubernamentales. En razón de la importancia de Lima y de Callao – jurisdicciones que forman parte del área metropolitana – cada una de ellas constituye una región, presidida por su alcalde municipal.

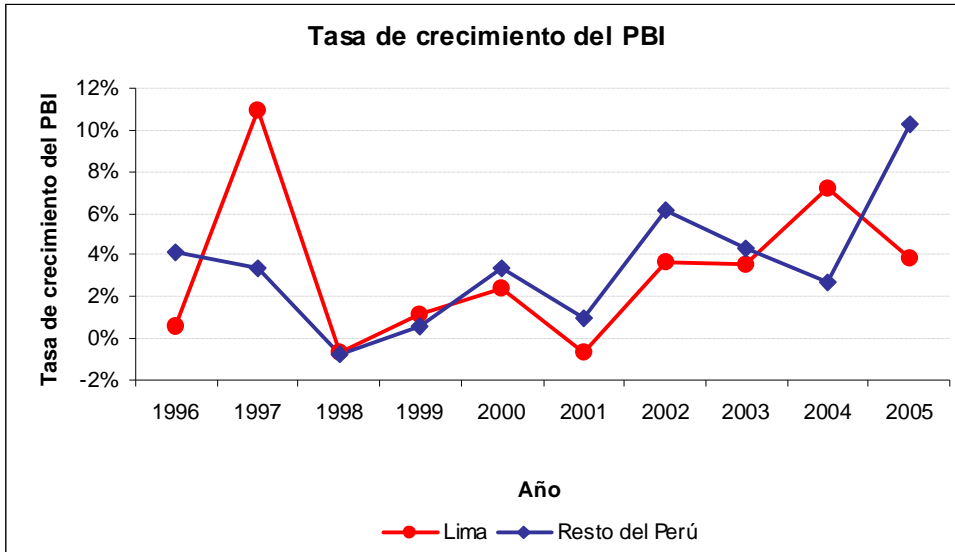
cual se tradujo en que, durante los dos primeros años del gobierno de Toledo, la inversión pública fuera inferior a la de los años noventa, que los niveles de empleo no superaran los de la década de los ochenta y que el ingreso por persona fuera equivalente al de 1975, treinta años atrás.

En las nuevas condiciones democráticas esta situación era insostenible y originó que trabajadores urbanos y campesinos, sectores medios de Lima y las regiones, así como las autoridades regionales protestaran violentamente contra el gobierno “central” de Toledo por continuar la política neoliberal de Fujimori, a la que se hacía responsable por la vulnerabilidad del país, de dichas capas sociales y de las regiones; a su vez, la oposición política dirigida por García se hizo eco de dichas manifestaciones agudizando la crisis política y poniendo en riesgo la gobernabilidad del país. Estas circunstancias determinaron el profundo descrédito de Toledo, quien llegó a ser el Jefe de Estado con la más baja aprobación en América Latina, de las instituciones y, en general, de la democracia.

Pero, a pesar de las precarias condiciones institucionales, la persistencia de la política económica durante el gobierno de Toledo comenzó lentamente a dar frutos a raíz de la recuperación que experimentaron los mercados internacionales de las sucesivas crisis de finales del siglo pasado. A partir de 2003, el alza de los precios de los minerales impulsó las inversiones en este sector; las preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos a los países andinos para combatir las drogas expandieron las exportaciones agroindustriales de la costa y las confecciones, a lo cual se agregó que el incremento del turismo favoreciera el desarrollo de las inversiones hoteleras.

Al igual que en otros países, las remesas de peruanos en el exterior se elevaron continuamente destinándose, principalmente, al consumo de los sectores populares; por último, el incremento de los precios de la cocaína producida en la selva y el contrabando que se observa en las fronteras se sumaron a aquellas actividades haciendo que la demanda interna dinamizara el aparato productivo formal e informal, en Lima y, particularmente en las provincias.

Sin embargo, estas señales no valieron para cambiar la opinión de la población de Lima y de las provincias, acerca de la invalidez de las instituciones estatales, de la política y del régimen democrático; pero, sobre todo, del desprestigio del Jefe de Estado.



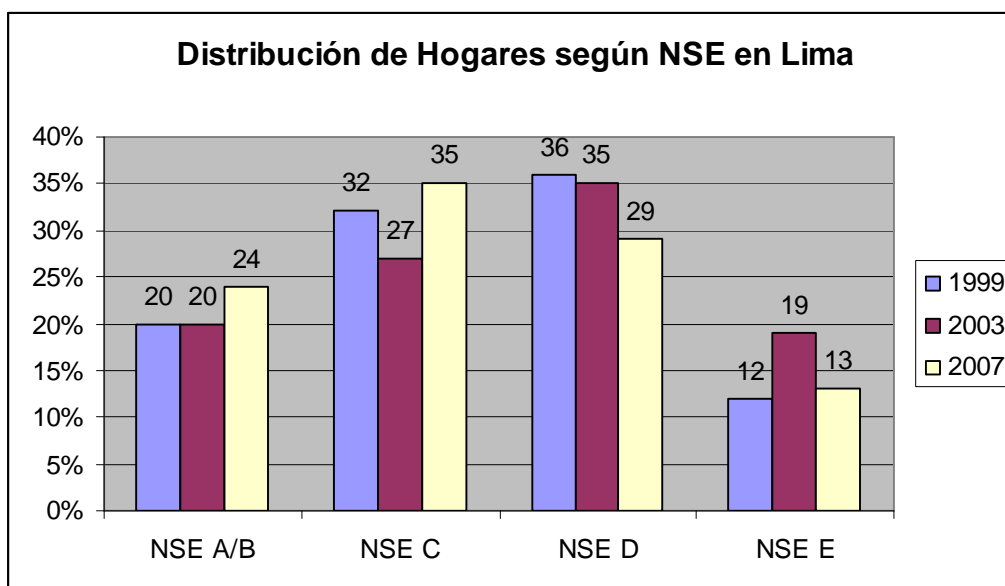
Fuente: Cuanto: Perú en números, 2006.

La remodelación económica observada desde 1990 y el crecimiento económico de los últimos años han propiciado la emergencia de nuevos empresarios y grupos económicos de origen provinciano que, en algunos pocos casos se han diversificado e internacionalizado, constituyéndose en referentes de las esperanzas de éxito de los múltiples propietarios de microempresas y, en general, de las nuevas capas medias surgidas en los “conos” de Lima y en las principales ciudades del interior.

En efecto, en los últimos años ha sido notorio el crecimiento de estos nuevos estratos sociales atribuido, fundamentalmente, al trabajo independiente. A este respecto es notorio el crecimiento de las microempresas formales en las “periferias” urbanas y su especialización productiva en diferentes distritos de Lima debido al desarrollo del microcrédito en el país. Entre 1994 y 2006, las colocaciones de estas entidades pasaron de 236 a 2,239 millones de dólares, por lo que se incrementaron en 566%, en tanto las colocaciones del sistema financiero crecían en 31% en ese periodo al tiempo que el número de deudores totalizaba 1.8 millones, alrededor de 120.000 menos que el de la banca

múltiple; sin embargo, el promedio del crédito otorgado por las microfinancieras es de 1.200 dólares, en tanto el de la banca es de \$ 7.700¹⁶.

Estos cambios han alterado la composición social de los “pueblos jóvenes”, en los que se observa el crecimiento de nuevos sectores medios que se distinguen de los tradicionales por sus orígenes, ocupaciones, estilos de vida y aspiraciones; por esto, las grandes empresas comerciales han descubierto el potencial de consumo en estos distritos y compiten en la instalación de supermercados y “malls”. A estos centros comerciales se agregan la presencia de colegios y servicios médicos privados, de entidades bancarias, restaurantes, discotecas, cinemas, gimnasios y tiendas de modas para valorizar el suelo y rediseñar el espacio urbano; conjuntamente con los nuevos contenidos de los medios de comunicación, estos elementos contribuyen a modificar los patrones de consumo y los estilos de vida de los jóvenes y en general de los residentes en estos nuevos barrios, difundiendo una nueva cultura popular que propicia la integración social de sus pobladores en el nuevo contexto urbano.



No obstante esas transformaciones, subsisten fuertes contrastes en Lima y con el resto del país. Como se ha señalado antes, alrededor del 40% de la población se concentra en los dos estratos de menores ingresos y el estrato más alto (A/B) tiene, en promedio, ingresos 16

¹⁶ Carolina Trivelli, (2007) El sistema financiero y características para el crédito agro en el Perú. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

veces superior a los hogares del más bajo nivel; a su vez, persiste la oposición de Lima con las otras ciudades y el resto del país puesto que, “...a excepción de Lima...en el Norte, Centro, Sur y Selva, los niveles socioeconómicos D y E (los dos más bajos) representan más del 70% de la población de los hogares”¹⁷.

Además, los resultados del crecimiento económico en términos de reducción de la pobreza fueron muy diferenciados y siguieron la tendencia conocida: la población en situación de pobreza disminuyó en Lima, la costa urbana y, en menor medida, en la sierra urbana, mientras que la sierra rural y la selva no presentaron cambios significativos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Incidencia de la pobreza total según ámbitos geográficos, 2004-2006 (porcentaje)

	2004	2006
Total	48.6	44.5
<i>Área de residencia</i>		
Urbana	37.1	31.2
Rural	69.8	69.3
<i>Regiones Naturales</i>		
Costa	35.1	28.7
Sierra	64.7	63.4
Selva	57.7	56.6
<i>Dominios</i>		
Costa Urbana	37.1	29.9
Costa Rural	51.2	49.0
Sierra Urbana	44.8	40.2
Sierra Rural	75.8	76.5
Selva Urbana	50.4	49.9
Selva Rural	63.8	62.3
Lima Metropolitana	30.9	24.2

Fuente: INEI - ENAHO 2004-2006

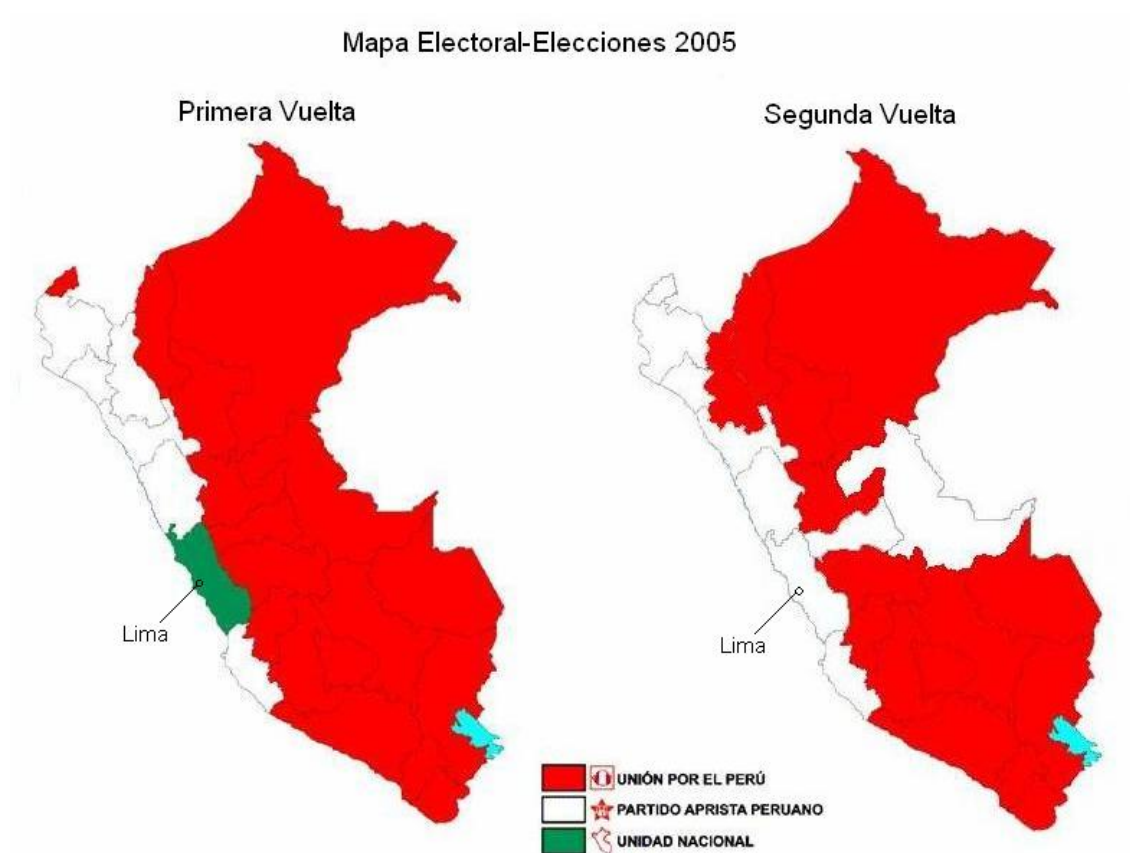
Como no podía ser de otro modo, la desigual distribución de los beneficios del crecimiento económico agudizó las contradicciones sociales, étnicas y regionales que se cristalizaron políticamente durante las elecciones de 2005. En esta ocasión la población de la sierra y de la selva mayormente pobre, campesina e indígena, volcó masivamente sus simpatías por el movimiento etno-nacionalista encabezado por Ollanta Humala, mientras en la costa los sectores de ingresos altos se inclinaron por Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano y

¹⁷ Ipsos/Apoyo, Opinión y Mercado: Niveles socioeconómicos 2007, Resumen Ejecutivo, p. 4

los medios y populares por Alan García, líder del Apra. En la segunda vuelta electoral, García ganó a Humala muy ajustadamente (2%), gracias al apoyo que recibió de los sectores medios y altos que habían votado por Flores.

En 2006, las elecciones regionales siguieron la misma pauta: después de haber ganado diez gobiernos en las anteriores elecciones regionales, en esta ocasión el Apra ganó sólo en dos regiones; en la mayoría de los otros casos triunfaron figuras y movimientos locales que mostraban su hostilidad al centralismo ejercido por el gobierno asentado en Lima.

Estos resultados electorales, tanto a escala nacional como regional, alertaron a sectores oficiales, a empresarios e intelectuales sobre el peligro que se cierne sobre la economía de mercado y la democracia representativa sino se toman medidas para ejecutar profundas políticas de “inclusión” de manera de reducir las desigualdades y las contradicciones sociales que generan.



Fuente: Observatorio de la Vigilancia Social. www.observa.org.pe

6. – García, veinte años después.

A raíz de la elección de Alan García en 2005, éste sorprendió al dejar de lado las posiciones “heterodoxas” que adoptara durante su primer gobierno, con los resultados desastrosos que habían producido, así como al abandonar la retórica anti-liberal que había desarrollado durante la campaña electoral, al tiempo que asumía posiciones ortodoxas, continuando el rumbo económico trazado por los gobiernos desde 1990.

Estas decisiones ocasionan que García acoja de buen grado los aplausos de los interesados en la continuidad del “modelo” mientras recibe las acusaciones que antes había enrostrado a Toledo, en el sentido de seguir la política neoliberal del fujimorismo y de estar aliado con dicho bloque político, amén de traicionar los ideales del Partido Aprista y de la plataforma que presentó durante la campaña electoral.

Este cambio en el comportamiento de García ha favorecido el continuo incremento de la inversión privada, lo que refuerza su convicción en la necesidad de perseverar en ese sentido; en efecto, se estima que en 2007 será la inversión 20% mayor con respecto al año pasado y los expertos pronostican que la continuidad de esta tendencia permitirá que el producto se duplique en una década. Esta inédita tasa de inversión ha hecho posible que el PBI crezca anualmente entre 6% y 7% durante los últimos cinco años, que se mantenga una baja inflación de 2% anual, y que se cuente con 22.000 millones de dólares de reservas internacionales, todo lo cual augura un saludable y sostenido crecimiento económico; de ahí que el presidente García se haya propuesto que el Perú obtenga el “investment grade”.

En suma, se aduce que a raíz de la persistencia de la política liberal aplicada durante los últimos 17 años el país experimenta una situación históricamente excepcional, puesto que nunca el Perú presentó una situación económica tan saneada y positiva como en el momento actual.

Sin embargo, como se ha dicho, los resultados de dicha política son particularmente beneficiosos para determinadas capas sociales de Lima y las ciudades de la costa, en detrimento de la mayoría del país, siguiendo la conocida tendencia histórica, lo que contribuye a profundizar las tradicionales desigualdades sociales y regionales.

Por tales razones, se ha desarrollado un sentimiento muy generalizado entre los dirigentes políticos y empresariales, así como de las organizaciones sociales, sobre la necesidad de que los ingentes recursos que cuenta hoy el Estado se destinen a la ejecución de políticas

públicas destinadas a reducir esas desigualdades, a fin de crear una base social más integrada que promueva los derechos ciudadanos y, de paso, minimicen los factores de riesgo político, concretamente, de las fuerzas que promueven las actitudes y los comportamientos anti-liberales y anti-capitalistas.

Para tales efectos, el presidente García se ha propuesto lograr metas ambiciosas al término de su mandato, en 2011, como reducir de 45% a 30% la proporción de la población que se encuentra en la pobreza, para lo cual ha contado con la aprobación del Congreso para llevar a cabo un “shock” de inversiones públicas. No obstante, al cabo del primer año de gobierno la administración pública, a escala nacional y regional, no ha podido gastar la mitad de lo presupuestado por los engorrosos trámites y también debido a la deficiencia de la burocracia gubernamental. Este hecho y los escándalos motivados por las irregulares compras efectuadas por dependencias públicas refuerzan la extendida creencia de que la administración pública está condenada por su ineficiencia y por su corrupción, por lo que sus funciones deberían ser adjudicadas al sector privado.

Esta situación aparentemente paradójica – tener recursos disponibles y no poder gastarlos rápido y bien - ha motivado que proliferen las críticas al desprestigiado aparato público y que se difunda la consigna sobre la urgente necesidad de “reformar el Estado” que, por lo general, no se acompaña con planes concretos y viables; y en los casos que se ha tratado de hacer algunos cambios en la administración pública han sido frenados por los intereses corporativos y con el aval de los dirigentes políticos.

Para contrarrestar esta situación, el presidente García ha intentado obviar los procedimientos atribuyendo funciones de responsabilidad pública a sus allegados a fin de impulsar las acciones gubernamentales pero que han sido detenidas por las críticas originadas y canalizadas a través de los medios de comunicación. Es así como estos comportamientos presidencialistas, que recuerdan las atribuciones patrimoniales de los jefes políticos, contribuyen a socavar más las débiles instituciones públicas.

El resultado ha sido que la ejecución de las políticas públicas no ha aliviado las crecientes desigualdades sociales ni ha satisfecho las expectativas sociales creadas por el sostenido crecimiento económico, mientras no cesa la difusión acerca de los espectaculares beneficios que han obtenido las grandes empresas y los sectores de altos ingresos de Lima durante los últimos años.

Al cabo del primer año de gobierno de García, estas disonancias han propiciado el estallido de múltiples tipos de conflictos sociales que se manifestaron en huelgas, marchas de protesta en Lima y bloqueos de carreteras a todo lo largo y ancho del país; en muchos casos, las autoridades lograron apaciguarlos mediante el diálogo y la negociación pero, en otros casos, los conflictos siguen en pie, como las exigencias de las comunidades campesinas con relación a la gran minería, y el rechazo de los productores de hoja de coca a la erradicación forzada por el gobierno, mientras que otros se mantienen latentes, como las demandas regionales al gobierno central.

Ante estas manifestaciones, el presidente García ha acusado a “agitadores comunistas”, a “curas rojos”, a las ONGs, a “trasnochados ideólogos izquierdistas”, a fuerzas externas (y así sucesivamente...) de fomentar las “irracionales” protestas y movilizaciones populares contra el gobierno con el propósito de dificultar el ingreso de las millonarias inversiones extranjeras en la minería a fin de impedir que el crecimiento y la redistribución fomente el desarrollo económico, la estabilidad política y, en consecuencia, la reducción de la pobreza al tiempo que dichos actores propugnan la temeridad que el Perú se sume a las filas del socialismo que postula Chavez.

En conclusión, hoy en día, el crecimiento económico de los últimos años y las transformaciones sociales y políticas que ha acarreado han agudizado las contradicciones entre los intereses sociales existentes en Lima, la costa urbana y la población de la sierra. Esta situación se presenta particularmente complicada por la inexistencia de mecanismos institucionales válidos y capaces de establecer mediaciones políticas y administrativas para amainar dichas contradicciones, lo que deriva en la creación de escenarios políticos volátiles que pueden tener consecuencias impredecibles.